

44ª SESION ORDINARIA DEL 20 DE AGOSTO DE 1884

Presidencia del Dr. Ruiz de los Llanos

SUMARIO — Asuntos entrados — *Se concede licencia al señor diputado don Cleto Peña para faltar á las sesiones por veinte dias* — Continúa la discusion pendiente sobre el dictámen de la Comision de Tierras Públicas en el proyecto de ley disponiendo la mensura de tierras en la Pampa para ser distribuidas en lotes á los ciudadanos pobres. (*Se aprueba*) — *Aprobacion sobre tablas del dictámen de la Comision de Inmigracion, Colonizacion etc., en las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley referente á la celebracion de una Exposicion Rural Internacional y de Agricultura Nacional en la Capital de la República* — *Aprobacion del dictámen de la Comision de Guerra y Marina en el proyecto de ley autorizando al Poder Ejecutivo á invertir una suma en remunerar á los redactores de las ordenanzas generales para la Armada* — *Aprobacion del dictámen de la Comision de Obras Públicas en el proyecto de ley autorizando al Poder Ejecutivo para contribuir con una suma para la ereccion del monumento conmemorativo de la batalla de Salta* — *Aprobacion del dictámen de la Comision de Hacienda en el proyecto de ley declarando de utilidad pública la ocupacion de los terrenos de propiedad particular situados á inmediaciones de los mataderos de la Capital* — *Aprobacion del dictámen de la misma Comision en los proyectos de ley sobre espropiaciones industriales en las provincias de Mendoza, San Juan y Santiago del Estero* — *Aprobacion de los dictámenes de la Comision de Peticiones con motivo del Mensaje del Poder Ejecutivo acompañando las solicitudes del administrador de Rentas de Salta, don Valentín Delgadillo y del Vista de la Aduana de la Capital, Don Miguel Casal, pidiendo sus jubilaciones* — *Aprobacion del dictámen de la misma en la solicitud de la preceptora doña Dolores Valdez, pidiendo igual cosa.*

PRESENTES

Presidente
Acosta
Albarracín (J. P.)
Albarracín (B.)
Argento
Arauz
Arigós
Araujo
Balsa
Barra
Berdia
Bustos
Cáceres
Calvo
Cano
Cárcano
Castro
Civit
Coquet
Corvalán
Cesta
Crespo
Darquier
Dávila
Fantas
Lima
F. mandez
Figuerola (F. C.)

En Buenos Aires, á veinte de Agosto de mil ochocientos ochenta y cuatro, reunidos en su Sala de sesiones los señores diputados anotados al margen, el señor Presidente declara abierta la sesion.

ACTA

— Se lee y aprueba la de la sesion anterior.

ASUNTOS ENTRADOS

COMUNICACIONES OFICIALES

El Poder Ejecutivo Nacional.

Buenos Aires, Agosto 14 de 1884.

Al Honorable Congreso de la Nacion.

Al presentar la ley número 1344, de 13 de Octubre del año pasado, autorizando la prolongacion del ferro-carri! de Campaná al Rosario, se omitió consignar las disposiciones necesarias para la espropiacion de los terrenos de propiedad particular que debia ocupar la empresa con la vía y estaciones.

Con arreglo á lo ordenado en esa ley, el Poder Ejecutivo ha celebrado el contrato correspondiente y ha aprobado los planos y estudios presentados

Figuerola (F. J.)
Funes
Gallo (D.)
Gil
Gilbert
Gorostiaga
Herrera
Lainez
Malbran
Navarro Viola
Ocampo
Olmedo
Ortiz
Palacio
Paz (E. N.)
Paz (M.)
Peña
Perez
Posse (F.)
Puebla
Pujol Vedoya
Quintana
Roca
Rodriguez
Romero
Serú
Solá
Solari
Solveyra

por la empresa, que demuestran la estension y direccion de la línea, sus alineaciones y pendientes, colocacion y tipo de las obras de arte, y número de estaciones y su ubicacion.

Los trabajos de construccion han comenzado con actividad, y la empresa manifiesta el temor de que sean demorados por falta de disposiciones referentes á la espropiacion mencionada.

En esta virtud, el Poder Ejecutivo ha preparado el proyecto de ley adjunto, y al someterlo á la consideracion de V. H., se permite encarecer su urgencia por tratarse de obras ya autorizadas por el Honorable Congreso.

Dios guarde á V. H.

JULIO A. ROCA.

BERNARDO DE IRIGOVEN.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1.º Declárase de utilidad pública la ocupacion de los terrenos de propiedad particular necesarios para la vía, estaciones y talleres del ferro-car-

Sosa ril de Campana al Rosario, según los
 Tagle estudios y planos aprobados por el
 Teran Poder Ejecutivo.
 Vega Art. 2º Autorízase á la empresa
 Vidal del ferrocarril mencionado para espro-
 Villamayor priar por su cuenta los terrenos á que
 Yofre se refiere el artículo anterior, con ar-
 Zavalia reglo á lo dispuesto en la ley de Se-
 Zavalla tiembre de 1866.
 Zeballos Art. 3º Comuníquese al Poder Eje-
 cutivo.

AUSENTES

IRIGOYEN.

CON LICENCIA

(A la Comision de Obras Públicas.)

Alvear

Araoz

Beltran

El Poder Ejecutivo Nacional.

Febre

Buenos Aires, Agosto 11 de 1884.

Gomez (F. M.)

A la Honorable Cámara de Diputados.

Posse (E.)

Solier

Videla

Iramain

El Poder Ejecutivo tiene el honor de elevar á la consideracion de V. H. el proyecto de ley adjunto, por el que se le autoriza á invertir hasta la suma de treinta mil trescientos treinta y un pesos con noventa y siete centavos moneda nacional, en el pago de varios créditos atrasados que se adeudan por el Departamento del Interior.

Todos ellos se encuentran en las mismas condiciones á los que se elevaron á la consideracion de V. H. en 1º del corriente.

SIN AVISO

Dios guarde á V. H.

De la Fuente

JULIO A. ROCA.

Diaz

BERNARDO DE IRIGOYEN.

Enciso

(Sigue el proyecto.)

(A la Comision Auxiliar de Presupuesto.)

— El Presidente del Senado comunica la sancion verificada por la Cámara que preside, del proyecto de ley en revisi- abriendo un crédito extraordinario por 108204 pesos con 63 centavos, para pagar diversos créditos provenientes de suministros y perjuicios ocasionados con motivo del estado de guerra en Junio de 1880.

(A la misma Comision.)

DESPACHO DE LAS COMISIONES

La de Guerra se ha espedido en las solicitudes de Doña Marcelina García, Babalmero Sotelo, Gualberta A. de Vazquez, Jacinta Rodríguez, Guillermina de Barrera, Prudencia G. de Santillan, Zorarias A. de Benitez, Arturo Richard y Maria Echaauri.

La de Obras Públicas en el proyecto del diputado Ortiz, sobre sondajes en los valles Cachalquies.

La de Inmigracion, en el proyecto sobre Exposicion Rural Internacional.

La de Negocios Constitucionales, en el pedido de intervencion del Gobierno de Santiago del Estero.

(A la orden del dia correspondiente.)

PETICIONES PARTICULARES

El ordenanza de la Aduana de la Capital, Don Venancio Ahumada, solicita jubilacion.

(A la Comision de Peticiones).

— La señora Januaria Bonahora, hermana del Sargento Mayor D. Seguro Bonahora, solicita pension graciable.

(A la Comision de Guerra).

LICENCIA

Buenos Aires, Agosto 20 de 1884.

Al Señor Presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nacion:

Teniendo gran necesidad de ausentarme de la Capital de la Nacion por el término de veinte dias, ruego al Señor Presidente se sirva recabar por este tiempo, de la Honorable Cámara, la licencia correspondiente.

Saluda al señor Presidente atentamente —

Cleto Peña.

Sr. Presidente—Con arreglo á la práctica establecida, se considerará este pedido sobre tablas, si no hay oposicion.

— Asentimiento.

— Se vota si se acuerda la licencia solicitada y resulta afirmativa.

Sr. Presidente—Se votará si la licencia es con dieta ó sin ella.

— Se vota y resulta afirmativa.

ORDEN DEL DIA

Sr. Presidente—No habiendo mas asuntos de que dar cuenta, se pasará á la orden del dia.

DISTRIBUCION DE TIERRAS NACIONALES

Sr. Presidente — Continúa la discusion pendiente sobre el artículo 2º del proyecto de ley sobre mensura y distribucion de tierras en la Pampa.

Sr. Figueroa (F. C.)—Pido la palabra.

A fin de que la Cámara pueda darse cuenta bien de la inteligencia de este artículo, y al mismo tiempo de la divergencia de opiniones que hay en el seno de la Comision, voy á permitirle darle algunas ligeras esplicaciones.

La ley acuerda, bajo ciertas y determinadas condiciones, el otorgamiento del título á los que soliciten la tierra; y estas son, como se sabe, residir cinco años, pedir la tierra para sí, ser mayor de veinte y dos años, ciudadano argentino ó naturalizado, hacer ciertas plantaciones y llevar cierta cantidad de ganado.

Por el artículo del proyecto del Poder Ejecutivo, se disponia que si se descubriese fraude en el cumplimiento de las disposiciones de esta ley, pudiera el Poder Ejecutivo, en cualquier tiempo, revocar el derecho, volviendo la tierra con todo lo edificado y plantado al dominio de la Nacion.

Tres ideas dominaron en el seno de la Comision: la del señor diputado Calvo, que decia que, una vez otorgado el título, de ninguna manera podia revocarse el derecho; que esto debia ser solo durante el plazo de cinco años.

Otro miembro de la Comision, queria que estos actos de fraude pudieran castigarse antes que la tierra pasara á un tercer poseedor, para que de esa manera no pudiera perjudicarse á un poseedor *bonna fide*; y por último el señalamiento de un término, como una transaccion, fué lo que prevaleció, y por eso es que se fijó el de un año.

La razon que tuvo la Comision para no aceptar el temperamento propuesto por el señor diputado Calvo, era evitar el que con facilidad pudieran cometerse fraudes en la ejecucion de esta ley, pues que, como es sabido, en esta clase de negocios el interés privado y el espíritu de especulacion aguja el ingenio de tal manera que es necesario tomar infinitas precauciones para que no se realicen actos dolosos.

Y esto no es una novedad, puesto que vemos que con la misma ley que fue en los Estados-Unidos se han cometido actos de esta naturaleza, de tal suerte que en la proclamacion de principios hecha últimamente por el partido republicano, señala como programa de su gobierno, que deben dictarse leyes para evitar estos fraudes, pues se ha descubierto allí que grandes empresas extranjeras adquirian la tierra, teniéndola durante cinco años en poder de terceros para hacérsela traspasar despues, ó bien haciéndola comprar despues de treinta meses, puesto que por la misma ley se puede comprar la tierra á un precio minimum que ella fija despues de un tiempo dado.

Puede suceder aquí el mismo caso, desde que autorizamos al poseedor á comprar la tierra despues de dos años de haber obtenido la concesion.

Puede, decia, hacerse esto por empresas, por interpuestas personas, y entonces es necesario castigar el fraude que pudiera descubrirse despues de otorgado el título.

No podria decirse subsistirá esto mientras no pase la tierra á tercer poseedor, porque podria eludirse facilmente esta dificultad de la ley.

Así, por ejemplo, una sociedad toma á Juan, Pedro ó Diego, les hace hacer sus solicitudes pidiendo tierras que, pasados los dos años pueden comprar al precio que la ley de tierras públicas establece como minimum que, como se sabe, es un precio muy bajo, y entonces, como despues de los dos años que las han poseído y cumplido con las obligaciones de la ley, ya pueden pedir el otorgamiento del título, lo hacen y lo traspasan al verdadero

dueño, haciendo contratos de ventas simuladas.

Todas estas cuestiones se presentaron al ánimo de la Comision y resolvió poner el término corto de un año, para que, si despues de otorgado el título y pasado el año no se descubriesen actos de fraude, quedase irrevocablemente adquirido el derecho; pero si durante el año se descubriesen actos de fraude pudiera el gobierno hacer que la tierra, con todo lo edificado y plantado, volviera al dominio de la Nacion.

He querido simplemente esponer las ideas que han dominado en la Comision para que la Cámara pueda darse cuenta de ellas y adoptar el temperamento que crea mas propio.

Sr. Gil—Quisiera preguntar al miembro informante de la Comision, si en el concepto de ella la anulacion traeria la reversion del dominio á poder del Fisco, aun cuando hubiera pasado á tercer poseedor, adquirente de buena fé.

Sr. Figueroa (F. C.)—Sí, señor, hasta un año despues de otorgado el título.

Sr. Gil—Entonces, yo estaré en contra de este artículo; creo que seria abrir una gran puerta á la inseguridad de las relaciones civiles.

El fraude no debe castigarse sino en el autor de él, y nada tienen que ver con él los terceros, compradores de buena fé, para tener seguro su dominio.

Sr. Figueroa (F. C.)—Fíjese que el proyecto solo establece el plazo de un año, pasado el cual puede hacerse la traslacion del dominio sin ningun inconveniente. Entonces, el comprador tendrá cuidado de fijarse si ha vencido ese plazo para que el título no adolezca de vicio alguno.

De otra manera, ocurrirá el caso que está sucediendo, que una empresa cualquiera compra por intermedio de otras personas que manda que soliciten la tierra, tomen posesion, la beneficien y la usufructen interinamente, y como la misma ley dice que despues de dos años de tenerla pueden comprarla al precio de veinte centavos la hectárea, una vez que han pasado los dos años, la traspasen al verdadero dueño, haciendo una venta simulada.

La Comision se encontraba con que se iba á defraudar el objeto de la ley, cuando su fin es poblar, repartir la tierra y evitar que pueda caer en manos de especuladores que puedan acaparar la tierra.

Entonces, para evitar esto, se ha fijado este plazo.

Sr. Gil—Ponga en el otro platillo de la balanza el inconveniente. Suponga adquirentes de buena fé que compran tierras y en seguida se encuentran con la pérdida de su

propiedad por fraudes que no han cometido.

Sr. Figueroa (F. C.).—Muy raro será el caso, porque como el plazo vence despues de un año del otorgamiento del título, el comprador puede fácilmente saber por su fecha si el plazo ha vencido ó nó.

Sr. Gil.—Soy de opinion que esto se deje bajo el imperio del Código Civil. Yo he de votar entonces, por la supresion de este artículo; creo que es mucho mas justo y prudente que el Congreso no entre á legislar sobre estos efectos civiles.

Sr. Figueroa (F. C.).—Fíjese que esto no cae bajo el imperio del Código Civil; se trata de una disposicion administrativa, en virtud de la cual se da la tierra bajo ciertas condiciones, para que el que la tenga por si mismo adquiera su propiedad.

Sr. Gilbert.—Pido la palabra.

Tambien voy á votar en contra del artículo, porque creo que el excesivo empeño que pone la Comision en evitar estas dificultades que suelen presentarse en las transacciones sobre tierras, va á entorpecer sus propósitos y á perjudicar esencialmente á los pobres á quienes se quiere donar la tierra.

La ley que se discute ha establecido ya que tiene que ocupar personal y directamente la tierra por el termino de cinco años, cultivando en ese tiempo tal área, plantando tal cantidad de árboles, introduciendo tal número de cabezas de ganado, etc, etc. Entonces, si no se ha cumplido las condiciones establecidas por la ley durante estos cinco años, ó si se ha cometido fraude para obtener su posesion, como todavia la tierra es propiedad de la Nacion, el Gobierno tendrá accion para proceder contra los terceros adquirentes en fraude de los propósitos que se tienen en vista al dar la tierra; pero no cuando hayan llenado las condiciones y pasado el término fijado por la ley, porque entonces ya han adquirido legítimamente la propiedad de la tierra y pueden enagenarla á quien quieran.

Sr. Figueroa (F. C.).—Fíjese que hay otro caso, el del artículo 14, por el cual despues de dos años el poseedor puede comprar la tierra.

Sr. Gilbert.—A eso voy.

La ley se está poniendo en tales casos, que va á hacer difícil que un hombre pobre quiera ir á ocupar estas tierras cuando tantas dificultades se le oponen para que pueda adquirir su propiedad definitiva.

No solamente se le imposibilita hasta de trabajar propiamente, porque desde que damos la tierra á pobres que no tienen capital, lo natural sería que se le diera en condiciones tales que ella misma les facilitara los medios

de desarrollar su trabajo con el capital que pudieran levantar sobre ella, hipotecándola, por ejemplo.

Pero en lugar de hacer esto, ponemos tales limitaciones, que difícilmente van á tener como vivir, si no tienen capital, puesto que nadie les va á fiar, desde que se sabe que no seran propietarios de la tierra que ocupen, hasta que no cumplan todas las condiciones que impone la ley.

Sr. Figueroa (F. C.).—Despues de un año si no se descubriese fraude....

Sr. Gilbert.—Pero fíjese que por otro artículo de la ley todos los actos, obligaciones y contratos que celebre el poseedor son nulos y la tierra no está sujeta á ejecucion por ellos.

Sr. Figueroa (F. C.).—No; dice que la tierra vuelve al dominio del Fisco; pero como no puede vender.

Sr. Gilbert.—Me estoy refiriendo al artículo anterior.

Sr. Figueroa (F. C.).—No se otorga el título de propiedad sino despues de los cinco años.

Sr. Gilbert.—Pero el artículo anterior dice que será nula durante ese plazo toda cesion de derechos, promesa de venta, hipoteca y demas actos tendentes á gravar los terrenos.

Y es lo que estoy diciendo: que se inhabilita al individuo para el trabajo, porque, como sabe el señor diputado, no basta con dar tierra á un hombre pobre para que pueda trabajar; es necesario proporcionarle capital. Entonces esta ley tendria por resultado que nadie que no tenga capital puede dedicarse á la agricultura ó la ganaderia.

Bien, si se ponen todas estas trabas durante el tiempo de la posesion, y aun despues que haya adquirido la propiedad de la tierra por el tiempo trascurrido y el cumplimiento de estas obligaciones; si todavia queda pendiente la accion del Poder Ejecutivo para perseguir la tierra si llega á enagenarla á un tercero....

Sr. Figueroa (F. C.).—Por acto fraudulento.

Sr. Gilbert.—Por acto fraudulento, dice el señor diputado.

Yo pregunto: ¿quien lo va á demostrar ó quien va á alegar la accion? ¿Quien va á hacer práctica esta medida?

¿La Comision de Inmigracion? ¿El fiscal de la Nacion va á ir á averiguar si se han cumplido las condiciones de la ley respecto de poblacion y cultivo de la tierra? Esto es completamente ilusorio, jamás se hará.

¿Es la accion popular? ¿Cualquiera puede denunciarlo?

Entonces será peor el remedio que la enfermedad, porque las denuncias van á ser mas fraudulentas que los medios empleados para obtener la propiedad de la tierra.

Ya ve el señor diputado cuantas dificultades presenta el artículo.

Por estas ligeras consideraciones, señor presidente, voy á votar en contra, creyendo que no se subsana ningun inconveniente con la medida indicada.

Sr. Argento—Pido la palabra.

Yo tambien debo dar algunas esplicaciones á la Cámara, de acuerdo con lo que manifesté en la sesion anterior.

Como notarán los señores diputados, aquí se trata de reglamentar la manera como se han de hacer las donaciones de tierras pertenecientes al Estado.

Así, pues, pura y simplemente se trata de la enagenacion de tierras, no por título oneroso, ni en virtud de contratos que tengan ese carácter, sino en virtud de donaciones á título gratuito.

Por consiguiente, el donante (principio general) tiene la facultad de imponer las condiciones que crea conveniente para hacer esas donaciones.

El artículo tiene por objeto dejar alguna defensa al gobierno para el caso que se haya eludido las disposiciones de esa ley, y al mismo tiempo tiene por objeto establecer una especie de sancion penal, diremos así, respecto de aquellas personas que hayan cometido fraude.

Ahora bien, por el artículo del Poder Ejecutivo se dejaba de una manera indefinida esta facultad que se daba á ese poder para que, por la via administrativa, en cualquier tiempo que se descubriera actos ejecutados para eludir el cumplimiento de esta ley, pudiera él revocar la donacion, diremos así, y volver la cosa á su primitivo dueño, es decir, al Estado.

Los miembros de la mayoría de la Comisión creimos que eso era realmente establecer la inseguridad en la propiedad, y entonces nos pareció conveniente establecer un término corto, dentro del cual el gobierno pudiera ejercer esa defensa contra el fraude cometido en mengua de la ley y de los intereses generales.

El señor diputado Calvo manifestaba que una vez otorgado el título de propiedad, debía ser este irrevocable; pero no se fijaba en que, cuando se trata de donaciones por las leyes generales, hay ciertos casos en que se puede revocar perfectamente bien las concesiones que son hechas á título gratuito.

Sr. Gilbert—Y como nosotros somos los donantes, estamos reglamentando las condiciones en que hacemos la donacion.

Sr. Argento—Justamente, como somos los donantes estamos estableciendo las condiciones bajo las cuales acordamos la concesion.

Sr. Gil—Nadie puede dudar del derecho.

Se trata de cual será la mejor reglamentacion; pero en cuanto al derecho del Congreso, para exigir todo lo que quiera al acordar la donacion, nadie lo ha puesto en duda.

Sr. Argento—Perfectamente, á eso iba.

Una vez reconocido el derecho del Congreso, como lo reconoce el señor diputado por Córdoba, viene ahora la cuestion de la conveniencia de la medida.

Como ha manifestado el señor miembro informante, en la Comisión hubo tres opiniones, fuera de la opinion del Poder Ejecutivo.

Uno de los señores diputados que forman parte de la Comisión, pensaba que una vez estendido el título ya era irrevocable, y no tenia, por consiguiente, el Gobierno nada que hacer, y que cuando mas esta disposicion debía regir para los fraudes que se descubriesen dentro del término de los cinco años fijado por el artículo 6º.

Otro de los miembros de la Comisión manifestaba la idea de que era conveniente establecer en el artículo que solo mientras permaneciera la tierra en poder de aquel que habia cometido el fraude, era revocable la donacion; pero sostenia que de ninguna manera era ella revocable despues que la tierra hubiera pasado á otras manos.

Hice presente en la sesion anterior que la Comisión no consideraba esto suficiente garantía, porque, como ha manifestado el señor miembro informante, de esta manera se podria eludir fácilmente el cumplimiento de la ley, haciendo la enagenacion inmediatamente á favor de un tercero.

Ahora bien, para llenar el objeto que se proponia el proyecto del Poder Ejecutivo, aunque no con la amplitud que éste daba, porque así indudablemente se vendria á gravar de una manera escesiva al individuo, dejándolo, por toda su vida, con una espada de Damocles suspendida sobre su cabeza, si me es permitido espresarme así, la Comisión creyó que, por vía de defensa para el Gobierno mismo, una vez otorgado el título, se podia establecer el término de un año para que dentro de ese término el Poder Ejecutivo pudiera ejercer esta accion administrativa, diremos así, para revocar la donacion y hacer que la cosa volviera al poder del Estado.

Pero, esto, repito, era por la via administrativa; y fijense los señores diputados que el Poder Ejecutivo establecia tambien la via administrativa, pero de una manera indefinida.

Quería solamente hacer notar estas circunstancias.

Sr. Arauz—Pido la palabra.

Señor Presidente: cuando en la sesion anterior se inició el debate sobre este proyecto, no me encontraba, por desgracia, presente, y

no pude, por lo mismo, tomar participacion en la discusion de su primera parte.

Hoy, presente á la discusion de este artículo, me llama mucho la atencion la disidencia de opiniones que respecto de él se ha producido.

No se trata, señor, de una cuestion enteramente nueva, pues un proyecto semejante fué objeto tambien de discusion en las Cámaras de Buenos Aires, en la época en que tenían asiento en ellas el señor presidente, si no me equivoco, el señor doctor Navarro Viola y algunos otros colegas aquí presentes.

Se trataba de la ley de tierras dictada, á propósito de unas reservas, y el proyecto de la Comision establecia una cosa bastante parecida á lo que dispone el artículo que está en discusion.

Establecia lo siguiente: Las condiciones de pago seran: una cuarta parte al contado, y las otras tres, á uno, dos y tres años de plazo.

Concluidos estos, y llenadas todas las demas condiciones (como en el artículo presente) de poblacion, introduccion de haciendas, etc., se dará la *escritura de propiedad*.

Pero era el caso, señor Presidente, que no habia tal propiedad, porque los individuos á quienes se les daba el título de propiedad no podian enagenar ni afectar la tierra que ocupaban sinó despues de transcurridos cinco años.

Yo combatí ese artículo porque me parecia impropio, y entonces propuse que, en lugar de tres, se acordase cinco años para abonar el precio de la tierra, es decir, el mismo término establecido para poder disponer de ella. Y así se sancionó.

Yo creo que es conveniente y aun necesario tomar todas las medidas conducentes á evitar el fraude; pero creo tambien que esas medidas solo se deben hacer efectivas antes del acto de otorgar la escritura, que es el título de propiedad definitivo para la posesion de la cosa.

Me parece que ir mas allá es hacer completamente ilusorio el título de propiedad que se dé.

El propietario en tales condiciones, no estaria nunca seguro, y los buenos efectos que se esperan de esta benéfica ley no se lograrían en la estension que se desea.

El señor diputado que acaba de hablar hacia presente que esto se prestaba á ciertas especulaciones.

Una de esas especulaciones, que el señor diputado no va á poder evitar por mas que quiera, que nunca han sido evitadas y que no se evitarán jamás, era la siguiente: que una sociedad hiciera solicitar por varios individuos unos cuantos lotes de tierra y que una vez cumplidos los plazos, hiciera volver todos estos

lotes á poder de aquella persona ó sociedad que hubiera dirigido la operacion.

El señor diputado cree que se podria salvar todo peligro de este género con poner un año de término despues de otorgada la escritura, para poder disponer de la cosa.

No se salvará nada con esto, porque, establecido ese plazo, querrá decir que la operacion fraudulenta que teme el señor diputado se realizará despues de ese año.

Será cuestion de un año mas.

Por la ley general de tierras de la provincia de Buenos Aires se establece que un individuo no puede solicitar mas de una legua, porque la mente del legislador ha sido que la tierra se pueble; y por eso se ha determinado que en cada legua de territorio se establezca una poblacion con tal número de hacienda.

Una vez llenados los requisitos que la ley establece, se estiende el título que acredita la propiedad, y entonces el propietario puede trasmitirla.

Por consiguiente no se puede impedir el fraude de ninguna manera, ni aun del modo que aconseja la Comision, porque con esa combinacion resultaria lo mismo.

Participo por regla general, de estas ideas, y creo que despues del acto de la escrituracion no puede irse mas allá con condiciones de ningun género.

Antes que fijar ese término pueden tomarse todas las medidas que garantan los bienes fiscales contra el fraude.

Estas son mis ideas y he querido manifestarlas brevemente.

Sr. Puebla.—Pido la palabra.

El artículo en discusion comprende dos puntos principales: uno que se refiere á la facultad que se da al Poder Ejecutivo para hacer la anulacion de la propiedad de estas tierras adquiridas por particulares, y otro que se refiere á la facultad que le confiere la ley para entender en esta misma revocacion.

En cuanto al primer punto, parece indiscutible, y en esto no estoy conforme con el señor diputado que acaba de hablar, que el Congreso tiene perfecto derecho de colocar en la ley esta disposicion, que tiende á garantizar su eficacia, es decir, á hacer prácticos sus objetos.

Sr. Arauz.—¿Porque da un año más?

Sr. Puebla.—Voy á explicar la razon.

Tal vez el señor diputado no está muy al corriente de esto.

Sr. Arauz.—Puede ser.

Sr. Puebla.—La ley tiene por objeto repartir la tierra entre los pequeños propietarios, y, ademas, evitar que esta sea objeto de especulaciones que no sean las que la misma ley determina, es decir, adquirirla para poblarla y cultivarla en cierta parte.

Como puede acontecer lo que el señor diputado decia que ha sucedido, parece, en algunas partes donde se ha aplicado leyes análogas, se coloca esta disposicion.

Sr. Arauz—Pero se ha poblado.

Sr. Puebla—Me parece que se equivocaba cuando sostenia que no es legal y que no se podia establecer una disposicion por la que se pueda declarar nulo un acto jurídico de adquisicion del dominio de la tierra despues de un año, por las causas que la ley establece.

En esto creo que hay un error.

Por el contrario, sostengo, como el señor diputado por Córdoba, que lo mas correcto en este caso, seria dejar que rigiera la disposicion del derecho civil, es decir, que si hay un acto de adquisicion de la tierra por dolo, fraude ó simulacion, que es lo que tendria á anular el objeto práctico de esta ley, este acto se encuentra en el mismo caso que los otros de la vida civil ordinaria.

Sr. Arauz—Perfectamente; está bajo la ley comun, como todo lo demas.

Sr. Puebla—Perfectamente.

Estamos de acuerdo.

En cuanto á lo que generalmente se ha sostenido, creo que lo mas práctico seria hacer una declaracion, en un artículo, para que se sobreentienda, aunque parece que sin ello estaria perfectamente sobreentendido, que el Fisco puede anular estos actos de dominio ejecutados por fraude, simulacion ó dolo, que son los que el derecho civil reputa nulos.

El Poder Ejecutivo, en su proyecto declaraba que perpetuamente existiria esa accion; la Comision la reduce á un año. Yo creo que en todo caso seria mas prudente dejar que este caso se rija por la disposicion general de derecho civil, haciendo una declaracion en ese sentido.

Esto en cuanto á un punto.

En cuanto al otro, me parece que tiene una importancia tal vez fundamental.

Por este artículo se establece en el Poder Ejecutivo la facultad de hacer por sí mismo la revocacion de los actos de adquisicion de la tierra, siempre que no estén conformes con la ley.

Me parece que en este punto puede haber un principio fundamental comprometido.

Toda persona que haya ocupado una estension de tierra por espacio de cinco años, satisfaciendo todas las obligaciones impuestas por la ley, queda, segun esta, propietario irrevocable y definitivo, y está amparado por las disposiciones del derecho comun.

Seria una anomalia, á mi entender, que en esta ley se estableciera cualquiera disposicion que pudiera desvirtuar el principio fundamental de la inviolabilidad de la propiedad.

Hay tambien otro principio que vendria á

ser afectado, si un propietario, que ha adquirido la tierra despues de cinco años de posesion, pudiera ser despojado de su dominio por otro poder que no fuera el poder judicial.

Pienso que ningun ciudadano podria ser privado de su dominio por sentencia que no fuera dada por sus jueces naturales, por los tribunales ordinarios, porque, si el caso se presentara, se suscitaria un pleito cuando el Poder Ejecutivo quisiera, por medio del fiscal ó de cualquiera otra manera, revocar el dominio de un propietario que ha adquirido la tierra por escritura pública.

Me parece que no seria del todo legal ni constitucional establecer en una ley especial como esta, que el que deberá juzgar este caso será el Poder Ejecutivo, porque esto afectaria, como digo, el principio constitucional de que nadie puede ser sacado de sus jueces naturales, para ser juzgado por un poder extraño.

¿De que procedimiento se valdria el Poder Ejecutivo para proceder en este caso?—Administrativamente, se dice. Pero ¿en que forma? ¿No seria oido el poseedor? ¿No se le admitiria prueba? ¿Que procedimiento se estableceria? Tampoco lo dice la ley, y esto redundaria en perjuicio del poseedor.

Puede resaltar mas la gravedad del artículo, si se tiene presente el caso en que un poseedor haya trasmitido sus derechos á un tercero, despues de los cinco años.

En ese caso, la nulidad por dolo no podria ir, como indicaba un señor diputado, contra el tercero, y la disposicion de la ley seria mas irritante porque privaria de sus derechos á un tercero, en virtud de procedimientos administrativos, cosa que no es muy constitucional y que seria sumamente inconveniente establecer.

Creo, á pesar de que estoy por la segunda parte del artículo, porque lo creo conveniente, que deberia deferirse el conocimiento de estos casos á los tribunales ordinarios, no acordando estas facultades judiciales al Poder Ejecutivo, porque no me parece correcto.

Sr. Figueroa (F. C.)—Pido la palabra.

He dicho que la Comision no habia tenido idea clara sobre este punto, y que si estableció este artículo fué por una especie de transaccion.

Creo que, para satisfacer los deseos de los señores Diputados, podria declararse que si se descubriesen fraudes durante los cinco años en que regiran las disposiciones de esta ley para los adquirentes, el Poder Ejecutivo podrá declarar caduco el derecho á la tierra.

Por lo demas, esta disposicion no es nueva.

La ley del hogar de los Estados Unidos, reconocida muy buena en aquel país, tiene

artículos análogos para evitar estos fraudes y ella dice lo siguiente:

Seccion 11^a. Las tierras adquiridas en virtud de esta ley, no estarán en ningún caso sujetas al pago de deudas contraídas antes de ser otorgado el título de propiedad.

Seccion 12^a. Si en cualquier tiempo despues de haber hecho la declaracion jurada que se establece en la seccion 2^a de esta ley, y antes de terminar los cinco años de que habla la seccion 5^a, se prueba, prévio aviso al poblador, á satisfaccion del escribano de la oficina de tierras, que la persona que hizo la declaracion jurada ha cambiado de residencia ó ha abandonado en cualquier tiempo la dicha tierra por mas de seis meses, en tal caso la propiedad de dicha tierra retrovertirá al Gobierno.

Y sigue reglamentando los casos.

Entonces, y no hay razon ninguna para que así no se disponga, una vez que, antes que se haya otorgado el título de propiedad, conoce el fraude, pueda revocar el derecho, porque no hay mas que una concesion; el título no se ha adquirido todavía.

Sr. Argento.—¿A los que hayan cometido el fraude durante los cinco años?

Sr. Figueroa (F. C.).—Sí, señor.

Sr. Argento.—Iba á preguntar al señor Ministro si realmente es esa la mente del Poder Ejecutivo, porque lo que nos ha trastornado (estoy hablando con franqueza, de buena fé, pues si hay error, queda tiempo de remediarlo) lo que nos ha confundido son estas palabras en *cualquier tiempo*, que indudablemente se refieren al tiempo de la incubacion, diré así, de este derecho.

Entonces, tiene mucha razon el honorable diputado miembro de la Comision, Sr. Calvo, en decir que esta disposicion cuando mas, se podría haber puesto para los fraudes y simulaciones que se cometieren durante los cinco años en que está preparándose el derecho.

Sr. Figueroa (F. C.).—No habia terminado.

Iba á proponer precisamente á nombre de la Comision, ya que otros de sus miembros se manifiestan de acuerdo, la siguiente fórmula:

«Si antes del otorgamiento del título se descubriesen actos ejecutados para eludir las disposiciones de la ley, el Poder Ejecutivo declarará revocado el derecho acordado, volviendo la tierra con todo lo edificado y plantado en ella al dominio de la Nacion.»

Sr. Ministro del Interior.—Pido la palabra.

Desde que se inician estas observaciones, he deseado explicar cual es la inteligencia que el Poder Ejecutivo da á este artículo.

Me parece que desde que la Cámara me escuche va á encontrar que solamente se necesita despejar algunas dudas á que realmente induce la frase tal como está, y fué esto mismo lo que indiqué en la Comision.

El pensamiento del Poder Ejecutivo ha sido que durante los cinco años antes que se ha-

yan extendido las escrituras definitivas de propiedad, *en cualquier tiempo*, (es decir, á los cuatro años, ó á los cuatro años y medio, y aun á los cinco, si todavía no estuvieran extendidas dichas escrituras) si se descubriese que se han practicado actos fraudulentos para obtener la tierra, el Poder Ejecutivo por sí solo, administrativamente, porque el negocio está todavía bajo su jurisdiccion, bajo la accion administrativa, declarará revocado el derecho, reincorporando la tierra al dominio de la Nacion, con mas todo lo edificado y plantado en ella.

Este es el espíritu del artículo.

Comprendo que la forma en que está redactado pueda prestarse á interpretaciones equívocas, y es por esto que yo me permití manifestar á los señores de la Comision que convenia aclarar el artículo.

Creo que la indicacion que ha hecho el señor diputado por Catamarca, salva todas las dificultades.

Lo que el Poder Ejecutivo propone y cree conveniente es lo que acabo de manifestar.

Pasados los cinco años puede realmente descubrirse que ha habido fraude ó dolo; pero ya el negocio habrá salido de la jurisdiccion administrativa, para entrar en el dominio del derecho civil y con arreglo á él es que podrán deducirse las acciones de nulidad que, contra este acto, como contra cualquier otro análogo, corresponden á los particulares, en defensa de sus intereses, ó al ministerio público, en defensa de la sociedad y de la ley.

Me parece, entonces, que bastaria adoptar la forma que ha propuesto el señor diputado por Catamarca.

Debo agregar otra observacion.

La adicion presentada por la Comision, y á la que no me he opuesto, ha tenido por objeto precaverlos de otros procedimientos fraudulentos que efectivamente se ponen siempre en accion, para obtener la tierra pública.

Como decia el señor diputado por Salta, en la sesion anterior, la verdad es que todas las leyes de tierra se han prestado mucho á especulaciones ilegítimas; la verdad es que, cuantas veces se ha querido favorecer á personas meritorias, á hombres que han prestado servicios al país, que han formado parte de los ejércitos, que han defendido la seguridad de las fronteras y la integridad del territorio nacional, hemos venido á favorecer, no á esos ciudadanos meritorios, sino á los especuladores, que han explotado esos premios, esas compensaciones, esas indemnizaciones acordadas por la Nacion ó por las provincias.

Para salvar estos inconvenientes, hemos

adoptado todas las precauciones posibles. Mas allá, es muy difícil llegar.

Hemos establecido la condicion de que el solicitante de un lote no tenga propiedad raiz en la Republica, para que quede bien constatado que hacemos esta donacion solamente á los hombres que, en realidad, puedan llamarse pobres; hemos establecido que deben pedir la tierra para trabajarla directamente; que deben justificar la propiedad de los ganados que introduzcan á ella; que no pueden enagenarla, gravarla, ni responsabilizarse con ella por deudas que contragan antes ni aun durante los cinco años de la posesion.

Si á pesar de tantas precauciones, se cometiesen actos fraudulentos que, en algun caso escepcional, obtuviesen el resultado propuesto, no tendrian mayor importancia, porque tampoco no son tan blandas las condiciones con que se entrega esta tierra, desde que lleva las de probarla, cultivarla y mantenerla en posesion, por un largo período de tiempo.

Pienso que, por estas consideraciones, el artículo puede quedar como está, sin mas que la aclaracion propuesta por el señor diputado por Catamarca, para que quede establecido que es una facultad que tiene el Poder Ejecutivo, antes de la escuturacion definitiva.

— Los señores diputados Ortiz y Navarro Viola, piden la palabra casi simultáneamente.

Sr. Presidente—Creo que debo dar la palabra al señor diputado por Salta.

Sr. Ortiz—Tal vez voy al mismo punto que el señor diputado por la Capital.

Creo que con una agregacion á la forma propuesta por el miembro informante de la Comision, hemos de quedar todos de acuerdo, porque estamos en la misma corriente.

Quiero hacer notar que la fórmula propuesta por el señor diputado, se refiere al poder que tiene el Poder Ejecutivo Nacional de declarar nulos, de una manera administrativa, aquellos actos que por esta ley son declarados nulos, durante el término de cinco años, es decir, antes que se espida el título de propiedad.

Pero es claro que la nulidad de estos hechos se estiende á mucho mas tiempo, aun cuando no puede ser declarada tal nulidad por el procedimiento administrativo.

Así es que sería necesario agregar mas ó menos las siguientes palabras: *Pasado este término las nulidades declaradas por esta ley, serán regidas por la ley civil.*

Sr. Gil—No hay necesidad.

Sr. Ortiz—Si hay necesidad, y voy á demostrarle que la hay.

Las nulidades establecidas en la ley civil

son para los actos civiles; aquí se trata de actos administrativos, con condiciones administrativas: se trata de hacer una donacion, como decia el señor diputado por Santa Fé, bajo condiciones determinadas, y las nulidades previstas por esta ley, no están previstas por la ley civil: son puramente nulidades establecidas por la ley que discutimos.

Estas nulidades se han de hacer efectivas administrativamente, como decia, por cinco años, y, judicialmente, despues.

Pero es necesario que la ley lo diga; porque si esta ley no establece nulidades y no les pone condiciones, no han de estar regidas por la ley civil, ni han de tener existencia porque por esta ley no la tienen.

Sr. Gil—Deseria que el señor diputado me contestase á la pregunta siguiente.

Si yo, con testigos falsos, engaño al Poder Ejecutivo y consigo tener un título, ¿ Cree el señor diputado que el fiscal no tiene accion para demandarme al dia siguiente, encarcelarme y anular el título?

Sr. Ortiz—Voy á contestarle terminantemente.

Si esta ley no contuviese ningun artículo que declarase la nulidad del acto por violacion de las condiciones establecidas por ella, no sería nulo el acto, sin duda alguna.

Sr. Gil—Entonces, toda ley que dictase el Congreso y que se relacionase con derechos privados, tendria necesidad de decir, esta ley cae bajo el imperio del Código Civil.

Sr. Ortiz—Sí, señor.

Sr. Gil—No, señor, no hay tal necesidad.

Sr. Ortiz—La ley establece tales y cuales condiciones para adquirir la tierra pública. Pero ¿cuales son los efectos de la violacion de estas condiciones? La misma ley tiene que preveerlos, ó tiene que decir que los efectos producidos por hechos violatorios de estas condiciones, se regiran por la ley civil.

La ley no puede callarse, porque si se calla no hay nulidad por la violacion. Habrá otra accion cualquiera; pero accion de nulidad no habrá en este caso.

Por eso es que propongo que se agregue esta frase á la fórmula del señor diputado: *Pasado dicho término, los actos de nulidad procedentes de esta ley serán regidos por la ley civil.*

Sr. Presidente—Tenga la bondad el señor diputado por Salta de dictar su agregacion.

Sr. Ortiz—Otorgado el título, la accion de nulidad será regida por las leyes civiles.

Sr. Malbran—Pido al señor Presidente que haga votar la redaccion tal cual viene de la Comision.

Sr. Presidente—Deseo saber si es apoyada la indicacion del señor Diputado por Salta.

— No es apoyada.

Sr. Presidente—No siendo apoyada, no creo que debo ponerla a votacion.

Se votará el artículo tal como lo propone la Comision.

Sr. Navarro Viola—Pido la palabra.

Para hacer una pregunta á la Comision.

No comprendo bien porque, siendo del mismo origen, y regidos por los mismos principios estos contratos, uno tarda cinco años y el otro dos para la escrituracion, es decir, ha de venir á ser de mejor condicion el que tenga dinero para anticipar el precio de la compra.

Me parece que hay alguna injusticia en esto; á no ser que la Comision retirase su artículo catorce.

Sr. Figueroa (F. C.)—En el primer caso, si se fija el señor diputado, la tierra se le da gratis, en el último caso la ley le vende el lote de tierra por quinientos pesos.

Si no quiere adquirir la propiedad por compra, debe satisfacer las condiciones que esta ley impone.

Sr. Navarro Viola—Entonces insisto en la pregunta, cambiando de consideracion.

¿Quiere decir que el comprador es de mejor condicion que el que con otra clase de títulos que lo hacen acreedor á la donacion, se presenta para adquirir la tierra?

Sr. Figueroa (F. C.)—Se presenta todo el que quiera comprarla.

Sr. Navarro Viola—Pero el que no tiene dinero no tiene facilidad de que se le presente la ocasion de adquirir la tierra.

La ventaja es de los que tengan dinero; y me parece que la ley no es equitativa.

Sr. Figueroa (F. C.)—Esta ley está calcada sobre la de los Estados-Unidos, que ha dado allí tan buen resultado.

Sr. Navarro Viola—No sé lo que pasa en Estados-Unidos, sinó lo que pasa aquí.

Sr. Figueroa (F. C.)—Hoy mismo puede comprarse la tierra al precio de quinientos pesos la legua.

Sr. Navarro Viola—Pero el que no tiene dinero espera cinco años.

Sr. Ministro del Interior—Pido la palabra.

Me parece que la explicacion de la disposicion es clara.

En el artículo 11, estamos tratando de la donacion de terrenos que la Nacion hace, con la condicion de poblacion durante cinco años.

Ahora, el artículo 14, se ha puesto en este caso: un individuo que ha entrado á ocupar un lote de tierra, no quiere acogerse al beneficio de la donacion, y despues de haber estado dos años, pide que se le escriture; no quiere mantener la obligacion de poblar durante cinco años con todas las condiciones que la ley impone.

No seria justo privarle del derecho de adquirir la propiedad comprándola.

Se le permite entonces que obtenga la propiedad pagando quinientos pesos por el lote de tierra, lo que importa pagar cuatro tantos del precio que el Congreso ha fijado para la venta de las tierras públicas en los territorios nacionales.

Es decir, por las leyes que autorizan la venta de la tierra pública en los territorios nacionales la base de la enagenacion es de quinientos y setecientos cincuenta pesos por legua.

En este caso, imponemos al poseedor del lote que no quiere, como he dicho, acogerse á los beneficios de la donacion, que pague quinientos por el lote que es un cuarto de legua de tierra: de manera que viene á pagar mucho mas del precio asignado para la venta de las tierras.

Sr. Arauz—Y este individuo que puede tener la propiedad de la tierra pagando quinientos pesos, tiene que llenar las condiciones de poblacion, introduccion de haciendas, etc.?

Sr. Ministro del Interior—Sí, señor.

Con esta ventaja: él queda ya en aptitud de disponer de la propiedad á los dos años, y que lo hará si le conviene; si no le conviene comprar, quedará en aptitud de acogerse á todos los beneficios de la donacion.

Sr. Arauz—Pero teniendo que demorar tres años mas, en ese caso, para obtener el título de propiedad.

Sr. Ministro del Interior—Sí, señor.

Sr. Navarro Viola—Como yo creo que el interés por parte del gobierno de recibir el precio, es en esta ley un interés subalterno al lado del deseo de averiguar la verdad antes de escriturar, es decir, saber si hubo ó no fraude, y si el gobierno cree que son necesarios cinco años para esta averiguacion, no comprendo como por la sola circunstancia de recibir el dinero puede renunciar á tres años de averiguacion.

Me parece que la objeccion es clara.

Sr. Ministro del Interior—Sí, la objeccion puede ser clara, pero desgraciadamente yo no la comprendo.

Sr. Navarro Viola—Voy á ver si tengo la fortuna de poder explicar con mas claridad mi pensamiento.

Sr. Presidente—Debo prevenir al señor diputado por la Capital, que está en discusion el artículo 11.

Sr. Navarro Viola—Sí, señor, sé que lo que está en discusion es el artículo 11, pero él está íntimamente ligado con el artículo 14.

Por eso necesito que se aclare lo que indicaba respecto á este, para decidir mi ánimo en la votacion del primero.

Decía que si el plazo de dos años se considera suficiente para la averiguación del posible fraude en esta clase de negocios, ese mismo plazo podría aplicarse en uno como en otro caso.

Si, por el contrario, se cree que dos años no bastan, entonces yo digo que no bastaran tampoco en el caso de mediar precio, porque esta es una circunstancia completamente independiente de la consideración moral respecto de la licitud del contrato hecho con el Poder Ejecutivo.

Por eso me inclinaria á que se fijase un plazo, ya sea de dos años, ya sea de cinco, para la escrituración.

De otra manera, es indudable que no habrá igualdad de condiciones para los adquirentes, y, repito, solo importaría una ventaja para el que pudiese oblar el dinero, que á veces podría apresurarse á hacerlo, por temor de la averiguación inmediata, haciéndose esta reflexión: desde que no se ha descubierto fraude alguno, á pesar de haber transcurrido los dos años, me amparo en la ley y consigo la escrituración, entregando el dinero.

Sr. Ministro del Interior.—Nó; me parece que el señor diputado no tiene presente esta consideración: es posible que adquiera, pero comprando, pagando, y pagando mucho mas de aquello que estaria obligado á pagar si comprara la tierra con arreglo á las leyes que autorizan la enagenación.

El señor diputado, no tiene presente esto.

El dice: es que se ha tomado los cinco años para garantírnos contra todo fraude, contra todo dolo.

Nó; los cinco años no se toman con el objeto de garantírnos contra un procedimiento doloso.

Sr. Navarro Viola.—Se ha dicho que ese es un proceder administrativo.

Sr. Ministro del Interior.—Los cinco años son para garantírnos de que la tierra se obtiene para trabajarla, para cultivarla.

Todo esto se consigue en el caso del artículo 14.

El individuo ha solicitado la tierra, ha introducido en ella el número de ganado que se prescribe, ha establecido la población; pero á los dos años, por tales ó cuales razones, no le conviene esperar; tiene interés en obtener su título definitivo de propiedad. Compra la tierra y lo hace en condiciones todavia mas gravosas para él que para cualesquiera de afuera, porque paga un precio mayor del que, como he dicho, ha establecido la ley para la enajenación.

Yo creo que no existe absolutamente la desigualdad que el señor diputado encuentra: todos quedan favorecidos, todos quedan con-

sultados en sus intereses y en sus conveniencias.

Sr. Navarro Viola.—Respecto del artículo 11, estoy perfectamente ilustrado.

Sr. Ortiz.—Desearia saber de la Comisión, ó de cualquiera de los señores diputados, cual es el artículo de esta ley que declara nulos los actos que importen una violación de las condiciones establecidas por la misma.

Sr. Navarro Viola.—El artículo 10.

Sr. Ortiz.—El artículo 10, dice: «Será tambien nula, durante ese plazo (el de cinco años es decir, se refiere á los actos administrativos del Poder Ejecutivo) toda cesion de derechos, promesa de venta, hipoteca y demas actos tendientes á enagenar ó gravar los terrenos á que se refiere esta ley, así como los documentos en que se declare haber poseído por cuenta de un tercero».

Durante el plazo de cinco años, serán nulos... pero serán nulos solamente los actos aquí previstos, no todos los actos de fraude, que importen violación de las prescripciones legales.

No hay ningun artículo de la ley que diga que son nulos los actos violatorios de las condiciones que ella establece para conceder esos terrenos; y no habiendo en la ley ningun artículo que lo establezca, ningun juez civil puede declarar la nulidad de esos actos.

Ademas, ¿cual es el artículo de la ley civil que declare nulos los actos violatorios de las disposiciones de la ley que discutimos?

Sr. Ministro del Interior.—Pido la palabra.

Me permito pedir al señor diputado por Salta, dedique su atención al mismo artículo que da margen á sus observaciones.

Ha sido necesario declarar nulos espresamente estos actos, porque son actos lícitos en todo aquel que dispone de una propiedad, venderla, hipotecarla, y gravarla, cuando le plazca.

Pero aquí hemos tenido que restringir este derecho, hemos tenido que limitarlo, para garantírnos contra ese procedimiento doloso y fraudulento de que se nos ha hablado en la sesión anterior, como en la presente.

Sr. Ortiz.—La observación del señor Ministro está probando que la nulidad no puede estar prevista por la ley civil, puesto que se trata de actos lícitos, segun aquella ley.

Sr. Ministro del Interior.—Si el señor diputado me permite, voy á continuar explicando como entiendo el artículo.

Ha sido necesario declarar nulos todos estos actos, para evitar que las personas que obtengan estos lotes de tierra beneficien con ellos á otras, prestando el pago de deudas, de hipotecas ó de otras obligaciones.

Ahora, la pregunta del señor diputado, es otra.

El dice: ¿Como se vá deducir la nulidad,

cuando incurra en una infraccion á las disposiciones de esta ley? ¿En virtud de que ley?

Sr. Ortiz—Estos actos declarados nulos por el artículo 11, segun el señor Ministro y segun los señores diputados, mas los actos á que, en su segunda parte, se ha referido el señor Ministro, pueden ser deducidos ante los jueces civiles, y yo digo: ¿en virtud de que artículo de la ley civil, ó de este proyecto, se puede deducir ante los jueces civiles tal nulidad?

Sr. Figueroa (F. C.)—Pido la palabra....

Sr. Presidente—¿Ha concluido el señor Ministro?

Sr. Ministro del Interior—No, señor, pero voy á concluir diciendo que la necesidad de establecer la nulidad de estos actos, ha venido de la consideracion que acabo de esponer: de no dejar en manos del concesionario el derecho de transferir el terreno concedido bajo el pretexto de una hipoteca, de una obligacion ó de una ejecucion que él mismo se hiciera promover.

Ahora, el señor diputado pregunta: Pero, cuando se viole otra de las disposiciones de la ley, cuando se obtenga fraudulentamente el terreno, ¿donde se lleva al infractor?

Le contesto: ante los tribunales.

¿En virtud de que autorizacion?

En virtud de los principios del derecho civil; nada mas.

He concluido.

Sr. Yofre—Pido la palabra....

Sr. Ortiz—Si el señor diputado me permite....

La observacion que voy á hacer tal vez obligue una contestacion de su parte, y entonces.....

Sr. Yofre—No voy á contestar ninguna observacion.

Voy á hacer una mocion de orden, porque esta discusion va prolongándose demasiado.

En la sesion anterior versó el debate sobre el tópico de la nulidad. El señor diputado por Salta hizo una larga disertacion para demostrar las nulidades que pueden surgir sobre estas concesiones de tierra. Actualmente ha tomado la palabra sobre el mismo asunto, y hace mas de media hora que está discutiendo sobre esa misma nulidad, tratando de comprimir la atmósfera en una cubeta.

Las nulidades estan legisladas por la ley civil, y el debate sobre este punto está agotado.

El señor diputado ha hecho mocion para que se modificase este artículo y la Cámara no ha creido deber apoyarla.

Pido el cumplimiento del Reglamento, y hago mocion para que se cierre el debate.

—Apoyado.

Sr. Ortiz—No es sobre el mismo punto.

Parece que no nos debemos mútuas consideraciones, entre colegas.

A lo menos, el señor diputado por Córdoba no me las acuerda.

Lo tendré bien presente, para lo venidero.

Pero prevengo al señor diputado que no es exacto lo que dice.

Y la prueba de que mi observacion ha sido buena, es que ha sido aceptada por muchos diputados.

Sr. Yofre—Pero el señor diputado trata de hacer resucitar la cuestion de la sesion anterior!

Sr. Ortiz—No es lo mismo; no me ha entendido.

Sr. Presidente—Pido al señor diputado que no hable, porque no le he concedido la palabra.

Sr. Yofre—Reitero la mocion para que se cierre el debate.

—Apoyado

Sr. Navarro Viola—Votaré en contra de esta mocion, porque habia pedido la palabra el señor diputado por Salta, antes de hacerse.

Sr. Calvo—Yo votaré en contra por la misma razon.

Creo que los diputados deben espresarse con entera libertad.

Sr. Ortiz—Agradezco á los señores diputados esta deferencia, que no ha tenido el señor diputado por Córdoba; pero, por mi parte, les pido que le acompañemos en su deseo, tan vehemente, porque no ha entendido la cuestion.

Sr. Yofre—Mil gracias!

—Se vota si se cierra el debate, y resulta negativa.

Sr. Presidente—Tiene la palabra el señor diputado por Salta.

Sr. Ortiz—Decia, señor Presidente, que el señor diputado por Córdoba no habia entendido la cuestion.

En la sesion anterior, hice presente las deficiencias que contenia este artículo; y es en virtud de eso que tanto el señor diputado Gil como todos los demas diputados que han hablado, se han encontrado conformes conmigo, en este punto: la ley civil debe ser la que rija estos actos, excepto aquellos que, por la disposicion espresa que acaba de redactar el miembro informante, van á ser declarados nulos por el poder administrador.

Pero disintimos en este punto: los señores diputados creen que los actos de nulidad estan previstos y regidos por la ley civil, y que, por consiguiente, cuando una accion de nulidad, fundada en la violacion de esos hechos, sea deducida ante el juez civil, despues de venci-

dos los cinco años, él vá á declarar esa nulidad.

Yo creo que no es así; aun cuando estamos en el fondo conformes.

Creo que si en esta ley no se establece un artículo general, que declare la nulidad de la concesion, el juez civil no vá á poder declarar nulos esos actos, porque los hechos que estamos reglamentando ahora no están ni pueden estar previstos en el Código Civil.

El Código Civil reglamenta las relaciones civiles de las personas entre sí y de las personas jurídicas.

Pero aquí no se trata de relaciones de personas jurídicas, sino de actos administrativos, hechos en interés y beneficio de los ciudadanos y de la Nación; de donaciones estableciendo condiciones espresas para que ellas surtan efecto.

Estas donaciones no estan regidas por la ley civil, son donaciones especiales regidas por esta ley administrativa.

Por consiguiente, la violacion de las condiciones que esta ley establece, no puede dar lugar á una accion de nulidad, si esta misma ley no lo declara; porque, por regla general, la nulidad no existe allí donde una ley no lo declara terminantemente.

Y la prueba evidente es esta que este artículo ha podido no existir; y que ha podido decir que los actos violatorios de esta donacion no traerán consigo la nulidad, sino un simple recargo de años en la poblacion, ó un recargo en el precio, ó cualquiera otra estipulacion distinta.

Ahora, puedo estar equivocando, (lo que parece ser, efectivamente, puesto que parece que la opinion de la Cámara es en mi contra), pero no estoy discutiendo lo mismo que en la sesion anterior.

Las opiniones que he vertido en esa sesion han sido aceptadas por casi todos los miembros de la Cámara, incluso los de la Comision.

Por consiguiente, no pierdo tiempo puesto que mis observaciones son aceptadas por muchos diputados.

Lo que se trata de saber, ahora, es si las ideas en que estamos conformes son suficiente garantia, por los términos en que está concebida la ley.

Yo creo que nó, y los señores diputados creen que sí.

Ahora puede haber entendido el señor diputado por Córdoba, con la explicacion que he dado.

Sr. Yofre—Pido la palabra.

Siento, señor Presidente, la interpretacion que ha dado el señor diputado á la mocion que he hecho.

No he tenido el propósito de presentarlo

como un dogmático que tiene por objeto fatigar la atencion de la Cámara; siempre soy muy respetuoso con mis honorables colegas. Pero creo que sobre las consideraciones personales que merece un diputado, están las prescripciones del Reglamento y las consideraciones que se debe á la Cámara misma.

Será tal vez un error de mi parte, no habré entendido la cuestion; pero no acostumbro nunca hablar sobre lo que no entiendo. Recuerdo al señor diputado que en la sesion pasada prevaleció la idea de anular el acto en cualquier tiempo.

Sr. Ortiz—Con arreglo á la ley civil.

Sr. Yofre—Y que ahora restringe á cinco años el período dentro del cual se puede anularlo.

Yo padezco del mismo error, indudablemente, que los demas miembros de la Cámara, que no han aceptado la indicacion del señor diputado, de espresar terminantemente en la ley que serán actos de nulidad los vicios de que pueda adolecer la cesion, por subrepcion ó por cualquier otro motivo. Pero, ya digo, encuentro apoyada mi opinion por la de la Cámara, que no ha querido aceptar la mocion del señor diputado.

Sr. Ortiz—Al contrario! está en contra de toda la Cámara; porque los diputados entienden que el acto es nulo segun la ley civil.

Sr. Yofre—Respecto al fondo del asunto, el señor diputado cree que esta concesion del Poder Ejecutivo no establece relaciones del derecho civil.

Tan las establece, que constituye la propiedad definitiva.

Cae, por consiguiente, bajo la accion de la ley comun, que determina todos los casos de adquisicion de derechos reales y los vicios de nulidad por los que pueda estar afectado el acto.

He querido dar esta explicacion como una satisfaccion al señor diputado y como una vindicacion de mi conducta.

He dicho.

Sr. Presidente—Se votará.

Sr. Ortiz—Deseo que, mientras vienen los señores diputados que están en antecala el señor Secretario lea la última parte del acta de la sesion anterior.

— El señor Secretario lee esta parte del acta:

En discusion el artículo 11, el señor diputado Ortiz propuso en su reemplazo el mismo artículo del proyecto del Poder Ejecutivo, fundando su voto en contra de la adiccion aconsejada por la Comision. Se siguió con este motivo un cambio de ideas, en que los señores Figueroa, Calvo y Argento explicaron el espíritu y alcance de la modificacion que la Comision propone, y el señor Ortiz, insistiendo en sus ideas de que debería redactarse el artículo en el sentido

de que los actos á que él se refiere fuesen anulables mientras puedan serlo con arreglo á las disposiciones de las leyes civiles.

Sr. Yofre—«El propuso el artículo del Poder Ejecutivo».

Sr. Ortiz—No ha entendido bien.

Sr. Gil—Pido la palabra.

Antes de que se ponga el artículo á votación, quiero hacer notar á la Cámara algunas incorrecciones de que, creo, adolece el artículo, tal como ha sido redactado por el señor miembro informante de la Comisión.

Siempre es bueno que las leyes sean correctamente redactadas.

Dice este artículo que «el Poder Ejecutivo, en cualquier tiempo declarará revocado el derecho acordado».

No hay ningún derecho acordado.

Sr. Figueroa (F. C.)—Derecho en expectativa.

Sr. Gil—No hay derecho acordado.

Luego dice: «volviendo la tierra con todo lo que esté plantado, al dominio de la Nación».

Parece que la tierra hubiera salido del dominio de la Nación.

Sr. Argento—Se da la posesión.

Sr. Figueroa (F. C.)—Bien; proponga la redacción que le parezca mejor.

Sr. Gil—*El poseedor perderá todo lo edificado y plantado, sin derecho á indemnización alguna.*

Sr. Figueroa (F. C.)—*El Poder Ejecutivo revocará.*

Sr. Gil—El Poder Ejecutivo no va á otorgar el título, y vamos á declarar lo que necesitamos declarar: que se pierde lo edificado y plantado.

No hay que poner al Poder Ejecutivo en colación.

Sr. Argento—Yo creo que no hay necesidad de modificar el artículo en el sentido en que lo quiere el señor diputado por Córdoba.

Los artículos anteriores son bien explícitos y aquí se entiende bien que se habla del derecho que da la posesión.

Sr. Navarro Viola—El artículo dice: «Volviendo al dominio de la Nación».

Parece que efectivamente hubiera perdido ese dominio la Nación, y no ha podido perderlo cuando no la precedido escrituración.

Podría ponerse *poder*, en vez de *dominio*.

Sr. Argento—La Comisión acepta esa sustitución.

—Se vota y aprueba el artículo en la siguiente forma:

Si antes del otorgamiento del título, se descubriesen actos ejecutados para eludir las disposiciones de esta ley, el Poder Ejecutivo declarará revocado el derecho acordado,

volviendo la tierra con todo lo edificado y plantado en ella al poder de la Nación.

— Se aprueba el artículo 12, se declara suprimido el 13 y se aprueba igualmente el 14, el 15 y el 16.

— Siendo el 17 de forma, se declara sancionado el proyecto.

— A invitación del señor Presidente, se pasa á cuarto intermedio.

— Vueltos á sus asientos los señores diputados, continúa la sesión.

ESPOSICION DE GANADERIA Y AGRICULTURA

Sr. Zeballos—Pido la palabra.

Entre los despachos de Comisión de que se ha dado cuenta, hay un proyecto, que tiene con sanción del Senado y que la tiene ya de esta Cámara, destinando una suma para la exposición de ganadería y agricultura que se celebrará en esta ciudad, siguiendo la práctica de la Sociedad Rural Argentina que la hace cada dos años.

El Honorable Senado ha aprobado el proyecto de la Cámara de Diputados, pero ha modificado la fecha, simplemente el año.

El año pasado la Cámara de Diputados sancionó el proyecto fijando para la exposición, como lo pedía la Sociedad Rural, el mes de Febrero de 1885.

Naturalmente, habiéndose despachado el proyecto recién en este año en el Senado, no hay tiempo para celebrar la exposición en 1885, y el Senado ha sustituido esta fecha por la del año 1886.

Hay urgencia, señor Presidente, en que esta cuestión se resuelva, porque los trabajos de organización están paralizados con motivo de esta ley.

Me permito, pues, rogar á mis honorables colegas que apoyen la moción que hago para considerar sobre tablas esta simple reforma de palabras.

— Apoyada la moción se vota y es aprobada.

— Se lee:

A la Honorable Cámara de Diputados.

La Comisión de Inmigración, Colonización, etc., ha tomado en consideración las modificaciones introducidas por el Honorable Senado al proyecto de ley que le fue pasado en revisión, referente á la Exposición Rural Internacional en la Capital de la República; y por las razones que dará el miembro informante, tiene el honor de aconsejar á V. H. la aceptación de las modificaciones hechas por el Honorable Senado.

Sala de la Comisión, Agosto 19 de 1884.

Nicolás A. Calvo — Aureliano Argento — F. C. Figueroa.